



Nádia Velleda Caldas
 Flávio Sacco dos Anjos
 Germano Ehlert Pollnow
 Universidad Federal de Pelotas,
 RGS, Brasil

Alimentación escolar y agricultura familiar

¿Hay espacio para la innovación social?

■ En este artículo, sus autores presentan la experiencia brasileña de los “mercados institucionales”, implementados por los Gobiernos del presidente Lula, en el marco del programa “Hambre Cero”. Analizan cómo a través de esas iniciativas se promovió un mayor acercamiento entre los agricultores familiares y los consumidores gracias al abastecimiento de alimentos a escuelas, hospitales, residencias geriátricas... Consideran los autores que este tipo de iniciativas supone una innovación social de gran utilidad para romper el dominio de los modelos agroalimentarios impuestos por los grandes grupos de la gran distribución. Entienden también que la experiencia brasileña puede servir de referencia a los países europeos en un momento en que se cuestionan muchos de los principios del actual modelo de desarrollo.

Palabras clave:

Brasil | Agricultura familiar | Política pública | Consumo alimentario.

En las movilizaciones agrarias de los últimos meses en España y en otros países europeos ha habido un rasgo común a todas ellas, a saber: la difícil situación de los agricultores debido a las fuertes pérdidas económicas en sus explotaciones. Estas pérdidas se deben, entre otras cosas, al llamado efecto *double squeeze* (Ploeg *et al.*, 2000) entendido como la doble presión de, por un lado, tener que alcanzar incrementos cada vez más elevados de productividad en sus explotaciones y, por otro, verse obligados a utilizar costosas tecnologías intensivas en capital que les supone un aumento creciente de los gastos de producción.

La protesta agrícola refleja situaciones desesperadas, agravando el problema de la despoblación rural y la “España vacía” (Del Molino, 2016), que siguen azotando, aunque con distintos grados de intensidad, a toda la geografía española. El impacto de la pandemia del Covid-19 ha hecho que las movilizaciones agrarias remitan, pero el problema de los agricultores persiste y seguirá demandando respuestas concretas, no solamente del Estado, sino de la sociedad civil española.

En este artículo partimos de la tesis de que la actual crisis agraria es resultado del modelo de desarrollo que comenzó a imponerse a finales de los años 1950, dando lugar

a la aparición de grandes imperios agroalimentarios y convirtiendo a los agricultores en meros suministradores de alimentos, materias primas y fibras, para una sociedad que rápidamente se urbanizó y que asumió el drama del éxodo rural como algo natural y baladí o como una simple etapa del proceso de desarrollo.

En estos momentos de incertidumbre, la energía de nuestras universidades y centros de investigación debe orientarse a encontrar nuevos caminos para afrontar la crisis que sufren miles de familias rurales. Debe dejar de centrarse solo en la innovación tecnológica y en la producción, y prestar más atención al problema de la despoblación rural.

De lo que se trata ahora es de generar innovación social, es decir, crear conexiones sociales e institucionales que permitan reducir, de un lado, las distancias físicas y simbólicas entre el campo y la ciudad y, de otro, plantear alternativas para poner en marcha nuevos canales de venta y distribución directa de los productos agroalimentarios a los consumidores finales. Pero la realidad es que todo el sistema económico actual no facilita la puesta en marcha de esas alternativas, sobre todo porque las grandes cadenas de distribución operan a escala planetaria gracias a las conexiones que la telemática les

proporciona, y también gracias a la compleja red de agentes intermedios que operan desde que el producto sale de la granja hasta que llega al frigorífico o a la mesa de los consumidores.

El actual sistema agroalimentario puede que sea eficiente, y lo es, desde el punto de vista de la rapidez con que desarrolla las operaciones productivas, comerciales y de distribución, así como de la fluidez, uniformidad y regularidad de todo ese proceso. Pero es un sistema insostenible si incluimos en el cálculo los costes energéticos, sociales y ambientales del transporte, distribución y comercialización de los productos.

Pero hay otras razones para pensar en la necesidad de reflexionar sobre las cuestiones alimentarias, y que debieran ocupar la atención de las autoridades sanitarias y económicas de España y del conjunto de la UE. La primera razón se refiere a las enfermedades ocasionadas por una mala alimentación, debida, sobre todo, al consumo de alimentos ultraprocesados, y que, junto a hábitos inadecuados (sedentarismo y escasa actividad física), conducen a la obesidad, el sobrepeso de la población infantil y juvenil y otros graves problemas de salud (hipertensión arterial, diabetes...). La segunda razón tiene que ver con el hecho de que las cuestiones alimentarias son un fenómeno multidimensional y complejo que transita no solo por el espacio ecológico y biológico, sino también por el psicológico, socioeconómico y político (Gracia Arnaiz, 2010). Por ese motivo, la cuestión agroalimentaria no puede ser comprendida de forma sectorial o segmentada.

A los efectos de este artículo proponemos reflexionar, por tanto, sobre lo siguiente: ¿Qué contribuciones pueden ofrecer los agricultores para afrontar los problemas asociados a la mala nutrición infantil? ¿De qué condiciones disponemos para construir un nuevo régimen de alimentación escolar que permita tanto asegurar una dieta adecuada como adquirir los productos directamente de las familias rurales? ¿Existen actualmente experiencias fiables en las que poder basarnos para poner en marcha estas iniciativas?

El propósito de nuestro artículo es invitar a los lectores a reflexionar sobre estas cuestiones a partir de una experiencia concreta que viene operando en Brasil desde el primer lustro de este siglo XXI. Es la experien-



En este artículo partimos de la tesis de que la actual crisis agraria es resultado del modelo de desarrollo que comenzó a imponerse a finales de los años 1950, dando lugar a la aparición de grandes imperios agroalimentarios y convirtiendo a los agricultores en meros suministradores de alimentos, materias primas y fibras, para una sociedad que rápidamente se urbanizó y que asumió el drama del éxodo rural como algo natural y baladí o como una simple etapa del proceso de desarrollo

cia desarrollada en el marco del conocido programa “Hambre Cero” (*Fome Zero*) mediante la creación de los denominados “mercados institucionales”. En estos mercados se han implicado universidades, hospitales, residencias geriátricas, escuelas públicas, prisiones, Ministerio de Defensa..., adquiriendo para su consumo alimentos producidos por los agricultores de tipo familiar. Creemos que, sobre la base de esa amplia experiencia brasileña, hay razones sobradas para pensar que pueden hacerse realidad en otros países, y en concreto en España, y no como iniciativas aisladas, sino como parte de una política de Estado.

El programa “Hambre Cero” y los mercados institucionales

Mientras el presidente George Bush empezaba su campaña bélica en Irak, el recién investido presidente brasileño Luis Inacio Lu-

la da Silva decidió no participar en esa guerra bajo una consigna que en aquellos primeros años del siglo XXI sonaba desconcertante para las pretensiones estadounidenses: “Nuestra guerra, presidente Bush, es contra el hambre”, decía Lula.

No hay espacio en este artículo para explicar los factores que hicieron que Brasil se viera ante el imperativo de afrontar la gran paradoja de ser uno de los graneros del mundo y ser también un país marcado por el hambre y la inseguridad alimentaria, especialmente su población urbana.

Nuestro reto, decía Lula en los primeros años de su mandato, es asegurar a cada ciudadano brasileño el derecho a una alimentación sana, desde el alba hasta el anochecer. Así, en sus dos sucesivas legislaturas (2003-2010) fueron rescatadas de la extrema pobreza más de 36 millones de personas, se redujo la mortalidad infantil en un 45%, disminuyó el número de personas subalimentadas en un 82% y se logró que Brasil



El actual sistema agroalimentario puede que sea eficiente, y lo es, desde el punto de vista de la rapidez con que desarrolla las operaciones productivas, comerciales y de distribución, así como de la fluidez, uniformidad y regularidad de todo ese proceso. Pero es un sistema insostenible si incluimos en el cálculo los costes energéticos, sociales y ambientales del transporte, distribución y comercialización de los productos

desapareciera del mapa del hambre que la FAO elabora anualmente. El programa “Hambre Cero” (*Fome Zero*) ha sido fuente inspiradora para experiencias similares en otros países, sobre todo latinoamericanos y africanos.

El programa “Hambre Cero” no es una suma de acciones puntuales, sino un macroprograma que incluye una serie de instrumentos que van desde la transferencia directa de renta (como la llamada Bolsa Familia) hasta programas de acceso a la tierra, pasando por la construcción de comedores sociales, huertos urbanos... En concreto, el programa se vertebra en cuatro grandes ejes: a) acceso a la alimentación; b) procesos de generación de renta; c) articulación y movilización social, y d) fortalecimiento de la agricultura familiar.

Y es bajo la égida de este cuarto eje como se crearon lo que vino en llamarse “mercados institucionales”, gracias a la implementación de políticas públicas dirigidas a promover la compra anticipada de la produc-

ción de los agricultores familiares y de otras colectividades (comunidades indígenas, afrodescendientes, pescadores artesanales...). Esos mercados institucionales se crearon tanto en el marco del Programa de Adquisición de Alimentos (PAA) como del Programa Nacional de Alimentación Escolar (PNAE). La diferencia entre ambos programas es que el primero (PAA) atiende a hospitales, residencias geriátricas, poblaciones en situación de exclusión social..., mientras que el segundo se destina a la población escolar.

Desde un punto de vista teórico, los mercados institucionales son concebidos como una expresión de lo que se conoce en la literatura internacional como *alternative food networks* (redes agroalimentarias alternativas). Con este término se designan las iniciativas que emergen en distintos países como respuesta a los problemas que plantea el modelo dominante de producción, distribución y consumo de alimentos, en lo que respecta a la sostenibilidad medioambien-

tal, social y económica, particularmente en el ámbito de las pequeñas explotaciones de carácter familiar (Ericksen, 2008; Roberts, 2008). Conceptos como relocalización, reespecialización y reconexión describen la naturaleza de estas alternativas al sistema alimentario dominante (Renting, Marsden y Banks, 2003). En estas redes alimentarias subyace la idea de que el debate sobre la producción y el consumo de alimentos es una oportunidad excelente para desarrollar la “conciencia social” de los ciudadanos y para emprender estrategias de acción colectiva (Belasco, 2007:17).

El PAA (Plan de Adquisición de Alimentos) asegura la compra anticipada de los productos de la agricultura familiar para destinarla a determinados grupos de consumidores (las instituciones antes citadas). La adquisición de alimentos tiene lugar sin que sea necesario ningún proceso de licitación, pero siempre a unos precios de referencia, que no pueden ser ni superiores ni inferiores a los marcados en los mercados regionales.

Hay básicamente tres modalidades de PAA. Una es la compra directa de alimentos procedentes de la agricultura familiar, y siempre que los productores estén organizados en cooperativas o algún tipo de asociaciones formales e informales; los precios son fijados por el grupo gestor del PAA y la adquisición se realiza a través de la Compañía Nacional de Abastecimiento (CONAB) y con recursos públicos. La segunda modalidad consiste en la compra directa de los productos de la agricultura familiar, sin mediación de ningún organismo público, por parte de escuelas, asilos, comedores populares, poniendo en relación directa a los agricultores familiares y a los consumidores. Con esta segunda modalidad se pretende fortalecer el tejido social y productivo, así como generar trabajo y renta tanto en el medio rural como en el urbano. La tercera modalidad consiste en la formación de stocks de alimentos procedentes de la agricultura familiar, con objeto de financiar el almacenamiento de estas producciones, y siempre que los agricultores familiares se organicen en algún tipo de agrupación de productores.

A partir de 2011, y en años posteriores, surgieron leyes complementarias que ampliaron el alcance de los mercados institucionales, como es el caso del Decreto 8.473, que

establece que al menos el 30% de los recursos destinados al suministro de comidas en los centros públicos (universidades, institutos federales de educación, ejército...) debe canalizarse mediante la adquisición de productos de la agricultura familiar y de sus organizaciones al nivel del municipio o de la región donde se encuentren ubicados los comedores de dichos centros públicos. Al adherirse a dicho régimen, los organismos públicos pueden acceder a recursos del Gobierno federal. Y ha sido justamente esta la base jurídica, material e institucional que permitió que una institución federal de enseñanza superior brasileña, como la Universidad Federal de Pelotas (en el estado de Rio Grande do Sul), pusiera en marcha una iniciativa de mercado institucional.

Comedores universitarios, agricultura familiar e innovación social

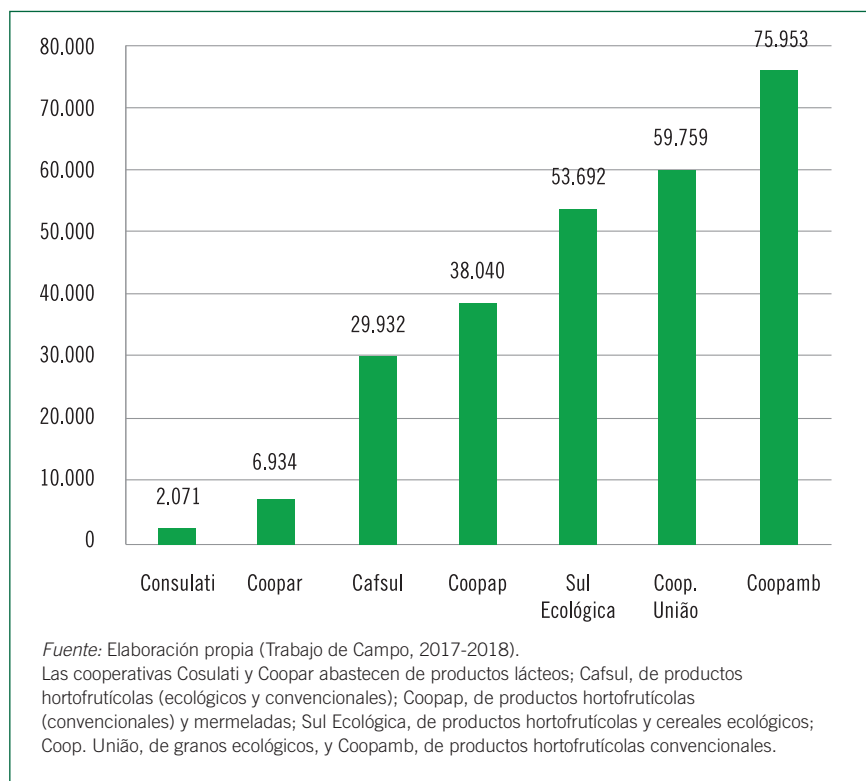
El término “innovación social” es una expresión polisémica. Según Ricci y Concha (2018), puede ser entendida como la expresión de soluciones innovadoras a problemas sociales y medioambientales. Pero lo fundamental es poner de relieve la cooperación entre los distintos agentes sociales como uno de los grandes vectores para reducir las desigualdades, un tema este de múltiples dimensiones (sociales, sexuales, económicas, políticas, étnico-raciales, geográficas...), todas ellas relacionadas entre sí.

Fundada hace 50 años, y ubicada en el extremo sur de Brasil, en el estado de Rio Grande do Sul, la Universidad Federal de Pelotas (UFPel) dio inicio a la compra de alimentos procedentes de la agricultura familiar en el año 2013 para abastecer los tres comedores que había entonces en el campus universitario. En ese momento, la comunidad de comensales estaba integrada por aproximadamente 4.000 personas (estudiantes, profesores y personal técnico y administrativo) que diariamente realizaban sus comidas, sobre todo el almuerzo, en comedores preparados y servidos por personal contratado a través de una fundación de derecho privado vinculada a la universidad. Anualmente se sirven entre 1,2 y 1,6 millones de almuerzos y cenas.

La comunidad universitaria de la UFPel asciende actualmente a 21.841 personas, in-

GRÁFICO 1

DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS CONTRATADOS POR LOS COMEDORES DE LA UFPel SEGÚN LAS DISTINTAS ORGANIZACIONES DE LA AGRICULTURA FAMILIAR, EN EUROS



cluyendo personal técnico y administrativo (1.332), docente (1.455), estudiantes de grado (16.461) y de posgrado (2.603). Una significativa parte de estas personas accede diariamente a los comedores universitarios. Algunos de ellos, como es el caso de los discentes atendidos por la asistencia estudiantil, realizan diariamente cuatro comidas (desayuno, almuerzo, merienda y cena). Sin embargo, es durante el almuerzo cuando afluye la mayor cantidad de personas.

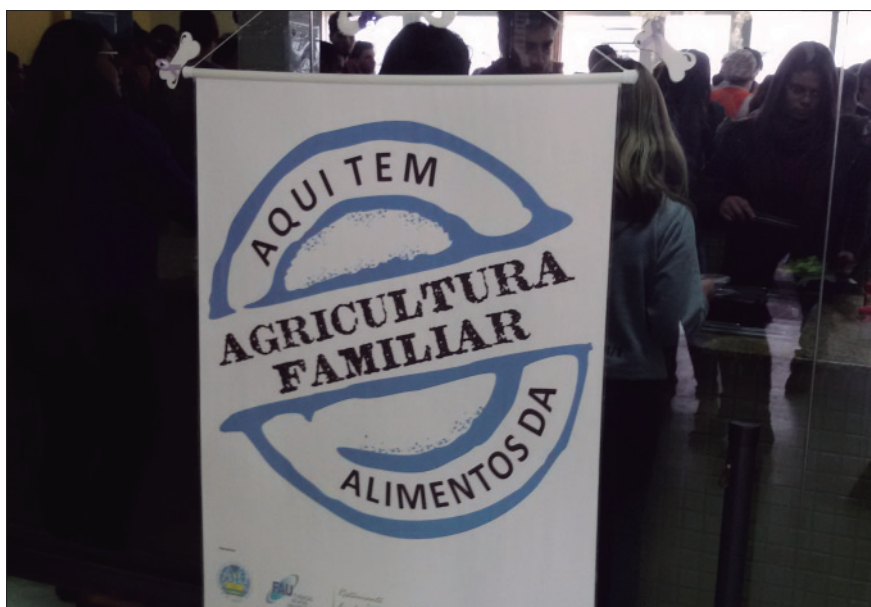
La investigación en que se basa este artículo estima que alrededor del 80% de los productos utilizados en la elaboración de las comidas en la UFPel procede directamente del suministro directo de siete organizaciones de la agricultura familiar de la región de Pelotas, como así lo muestran los datos del gráfico 1. El 20% restante corresponde básicamente a productos cárnicos.

Entre 2014 y 2018, el montante empleado en las compras institucionales ascendió a 3,25 millones de reales (alrededor de 823.000 euros). Las compras se dan a través de “convocatorias públicas”, es decir procesos de li-

citación a los cuales se presentan las organizaciones de la agricultura familiar que se comprometen a entregar la producción solicitada por la UFPel. Es importante subrayar que se paga un 30% más por los productos procedentes de la agricultura ecológica.

Tener garantizada por anticipado la compra de la producción hizo que muchos agricultores familiares de la región invirtiesen recursos en sus explotaciones para adaptarse a una demanda que no solo incluye a los comedores de la UFPel, sino también a los de otras instituciones, como por ejemplo el ejército y las escuelas de la red pública de los municipios de Pelotas y región. En el caso de los comedores escolares de las escuelas públicas nos referimos al PNAE (Plan Nacional de Alimentación Escolar), que, a nivel nacional, atiende a un universo de 43 millones de alumnos. De este modo, los agricultores familiares de Pelotas construyeron nuevos invernaderos, introdujeron y/o perfeccionaron sistemas de riego y ampliaron sus áreas productivas, gracias a las garantías ofrecidas por los entes públicos.

Nuestro reto, decía Lula en los primeros años de su mandato, es asegurar a cada ciudadano brasileño el derecho a una alimentación sana, desde el alba hasta el anochecer. Así, en sus dos sucesivas legislaturas (2003-2010) fueron rescatadas de la extrema pobreza más de 36 millones de personas, se redujo la mortalidad infantil en un 45%, disminuyó el número de personas subalimentadas en un 82% y se logró que Brasil desapareciera del mapa del hambre que la FAO elabora anualmente



Sin embargo, los cambios políticos acaecidos en Brasil desde el golpe de Estado sufrido por Dilma Rousseff interrumpieron la trayectoria de éxitos cosechados a lo largo de más de una década de gobierno del Partido de los Trabajadores. Los mercados institucionales siguen funcionando, pero la aportación de recursos públicos ha disminuido sensiblemente. Incluso la citada experiencia de la universidad UFPel no estuvo a salvo de ello, tras la presión ejercida en los últimos años por parte de los órganos de control del presupuesto público (Tribunal de Cuentas del Estado).

Aunque no hubo ningún indicio de uso ilícito de los recursos por parte de la UFPel, dicho tribunal considera que las renovaciones de los contratos (convocatorias públicas) se dieron sin respetar el principio de la libre competencia. Es decir, surge aquí la eterna fábula neoliberal que desde hace tiempo viene siendo fuertemente cuestionada por amplios sectores de la economía mundial, pero que es empleada por la justicia brasi-

leña para interrumpir una iniciativa que se mostraba altamente beneficiosa, ya sea desde el punto de vista de la calidad de las comidas servidas, ya sea de su capacidad para generar empleo y renta en el campo y en la ciudad, ya sea de su capacidad para formar tejido social y cooperativo entre los distintos sectores implicados.

Una de las consecuencias de todo ello ha sido la rescisión de los contratos de trabajo de los trabajadores empleados en los comedores de la UFPel. El segundo impacto ha sido realizar una licitación para que empresas de *catering* asumiesen el papel antes ocupado por la fundación universitaria. La única cosa que pudo hacer la administración de la UFPel fue imponer cláusulas que obligasen a dichas empresas de *catering* a adquirir los productos de las organizaciones de la agricultura familiar, requisito que en la práctica no está siendo adecuadamente cumplido.

Tras dichas alteraciones ha habido un sensible descenso de la calidad de los alimentos, hecho este que ha servido de argu-

mento para que los agricultores familiares y sus organizaciones representativas expresasen su descontento, especialmente sobre los perjuicios que estaban sufriendo. Gracias a esto, la UFPel ha tenido que cambiar la dinámica del proceso, obligando a las empresas a comprar de los productores.

No es posible prever lo que irá a suceder en los próximos años en relación a estos programas. Pero lo cierto es que no hay razones para aceptar la tesis de los que abogan en su contra o que arguyen la incapacidad de los agricultores familiares para atender a una demanda creciente de productos de calidad. Es una realidad innegable que estos programas han hecho una excelente pedagogía de la agricultura familiar y de la inclusión social en los espacios de la universidad pública, de los hospitales, de las guarderías y de otros ámbitos de la vida social.

¿Hay espacio para los mercados institucionales en España?

En España ya hay iniciativas similares a la de los mercados institucionales de Brasil, existiendo ayuntamientos (en Galicia y en el País Vasco) que compran directamente los productos a los agricultores familiares locales para abastecer a los comedores escolares. Con ello se subvierte la dinámica de la *caterización* de la alimentación escolar, mediante la cual empresas privadas se hacen cargo del suministro de comidas y meriendas a las redes de escuelas públicas y privadas.

No son pocos los casos de escándalos de malversación de recursos, así como episodios que demuestran la necesidad de reflexionar sobre este asunto. La alimentación escolar no puede ser vista como una cuestión circunscrita a la esfera de las Administraciones públicas o simplemente como un tema de regulación de las relaciones entre el ámbito público y privado, el ámbito local y regional, el Estado y de la ciudadanía.

Los datos disponibles informan que la población estudiantil española asciende actualmente a 8.158.605 estudiantes y 699.427 docentes en enseñanzas de régimen general no universitarias, repartidos en 28.211 centros por todo el país. Además de eso, casi medio millón de estudiantes se matriculó el pasado curso en la Educación de Personas de Adultos, distribuidos en 1.467 centros. La

cuestión de la alimentación escolar en sus distintos niveles demanda acciones coordinadas y debidamente articuladas en medidas de largo alcance que tengan en cuenta los siguientes principios fundamentales.

- a) **La transversalidad.** Comer es más que alimentarse. De los clásicos de la antropología (Mauss, 1971) aprendimos que la alimentación se convierte en un hecho social “total”, ya que diversos factores concurren en asegurar una dieta saludable y socialmente referenciada. Pero lo que importa aquí en el contexto de este artículo es que la alimentación escolar significa acercar la granja a la escuela (pública o privada) donde los niños viven múltiples experiencias y sensaciones. La educación y la alimentación no son compartimentos estancos y separados, sino todo lo contrario.
- b) **Una visión transversal.** Nuestra sociedad se basa en una cultura de ventanas separadas por donde se cuelan las estructuras de poder, la disciplina, los protocolos, las rutinas... Combatir el hambre y la inseguridad alimentaria, luchar contra la obesidad, el sobrepeso y las enfermedades a ellas asociadas no puede ser algo circunscrito a la ventanilla de un determinado organismo público, sea el Ministerio o la Consejería de Educación, sea el Ministerio de Agricultura o el de Sanidad. Es necesario romper con esa visión estanca que divide y fragmenta el conocimiento por especialidades, y que se canaliza en políticas sectoriales.
- c) **Cumplir los procedimientos legales, pero sin dificultar las innovaciones.** Hecha la ley, hecha la trampa. Este es el refrán que se suele usar de forma coloquial para aludir a los mecanismos por medio de los cuales se sortean los instrumentos de control en el uso de los recursos públicos. Pero profundizar en los dispositivos de regulación no puede convertirse en un inmovilismo que impida poner en marcha nuevos sistemas alternativos para la compra de productos directamente de los productores, abasteciendo así a los comedores escolares y a otros organismos de las Administraciones públicas.
- d) **Inclusión social y productiva.** Una de las grandes virtudes de los mercados institucionales es justamente apostar por la formación de tejido social y promover ci-



En España ya hay iniciativas similares a la de los mercados institucionales de Brasil, existiendo ayuntamientos (en Galicia y en el País Vasco) que compran directamente los productos a los agricultores familiares locales para abastecer a los comedores escolares. Con ello se subvierte la dinámica de la *catterización* de la alimentación escolar, mediante la cual empresas privadas se hacen cargo del suministro de comidas y meriendas a las redes de escuelas públicas y privadas

- clus virtuosos de inclusión social en las comunidades rurales. Los productores piden oportunidades, no limosnas, a las Administraciones públicas. De lo que se trata es de ampliar horizontes, diversificar fuentes de ingreso y acercar a los productores a las instituciones, sobre todo a las escuelas.
- e) **Cooperación horizontal y vertical.** Los mercados institucionales impulsan la creación de dinámicas asociativas, tanto en lo que se refiere a la creación de actores colectivos responsables de satisfacer las demandas de las Administraciones públicas como también de incentivar procesos de agregación de valor a sus producciones (agroindustrias) y todo ello con fuertes impactos en la generación de rentas y de trabajo. Además de esto, dan protagonismo a las organizaciones agrarias y las incitan a la construcción de una nueva agenda sindical que supera la tradicional demanda de ayudas públicas.
- f) **Respeto a la diversidad cultural.** La creación de mercados institucionales no supone renunciar a la diversidad cultural en lo que se refiere a las prácticas alimentarias o hábitos de consumo arraigados en los territorios. Por el contrario, de lo que se trata es de conciliar la puesta en valor de la gastronomía local con la calidad nutricional requerida para el desarrollo integral de la población en edad escolar.
- g) **Aprendizaje e innovación.** El aprendizaje trasciende los muros de los centros de enseñanza cuando se implantan experiencias del tipo de los mercados institucionales. Todos nos vemos obligados a cambiar de mentalidad, a romper con viejos esquemas que lastran nuestra imaginación. Se trata de crear puentes de diálogo entre mundos que se han ido separando en las últimas décadas. Los alimentos que llegan a las escuelas de mano de los agricultores pueden con-

vertirse en un puente de comunicación y de enseñanza recíproca. Este tipo de innovaciones es también una forma de ampliar el modo de percibir el mundo que nos rodea.

- h) **Pedagogía de la buena alimentación.** No bastan las prescripciones de los médicos y nutricionistas en favor de las bondades de comer alimentos sanos y de evitar los productos ultraprocesados, o sus advertencias sobre las enfermedades asociadas a ellos. Hacer pedagogía en favor de una buena alimentación supone cambiar la forma de trabajar este tema en las clases con los alumnos, y exigir a las autoridades iniciativas firmes y decididas para enfrentarse a estos problemas. Son iniciativas que pueden ir desde impedir el acceso a productos nocivos hasta restringir las campañas publicitarias que incitan a los jóvenes a consumir esta clase de artículos.
- i) **Revalorización de la función de los productores.** No es necesario mucho esfuerzo para crear una imagen positiva de la figura del agricultor, como actor responsable de asumir un papel tan destacado en el abastecimiento de nuestras poblaciones. El problema se da justo cuando las empresas de la gran distri-

bución y lo que ha venido en llamarse imperios agroalimentarios, se presentan como los grandes protagonistas de los modelos de producción y consumo de alimentos, relegando a un segundo plano el rol desempeñado por miles de familias que diariamente dedican su energía y sus recursos al servicio de la colectividad. Aunque la capacidad de incluir a los agricultores en los mercados institucionales presente dificultades desde el punto de vista económico debido a las limitaciones presupuestarias, no puede minimizarse el importante impacto que este tipo de iniciativas tiene en nuestra sociedad.

Reflexiones finales

Es impensable imaginar la sociedad que emergerá de la pandemia del Covid-19. Este asunto desborda el campo de observación que hemos elegido para escribir nuestro artículo. Pero algo nos parece claro en el escenario futuro, y es que apunta, entre otras cosas, a la necesidad de construir nuevas formas de cooperación y de repensar las relaciones entre los agricultores y la sociedad en general.

La crisis a la que se enfrentan los agricultores es sin duda importante. Pero también muestra una capacidad creativa que va más allá de las pautas de funcionamiento de las organizaciones agrarias y de las políticas sectoriales de la UE. Hemos presentado la experiencia brasileña de forma esquemática por razones de espacio, pero estamos convencidos de que puede ser de utilidad para promover el debate sobre asuntos relacionados con las cuestiones agroalimentarias, unas cuestiones de gran relevancia en un mundo tan complejo y cambiante como el actual.

Agradecimientos

Este artículo fue concebido durante la estancia de los tres autores en el IESA-CSIC (Córdoba) a través de la concesión de distintos tipos de ayudas del CAPES-PRINT-UFPel Program: de profesor visitante júnior a Nadia Velleda Caldas (proceso nº 88887.363881/2019-00); de profesor visitante sénior a Flavio Sacco dos Anjos (proceso nº 88887.363956/2019-00), y de doctorado-sándwich a Germano Ehlert Pollnow (proceso nº 88887.468275/2019-00). Los autores quieren agradecer a esta institución la ayuda recibida. ■

▼ Referencias bibliográficas

- BELASCO, W.J. (2007): *Appetite for change: How the counterculture took on the food industry 1966-1988*. Ithaca, New York: Cornell University Books.
- DEL MOLINO, S. (2016): *La España vacía, viaje por un país que nunca fue*. Madrid: Turner Noema.
- ERICKSEN, P. (2008): "Conceptualizing food systems for global environmental change research". *Global Environmental Change*, vol. 18, pp. 234-245.
- GRACIA ARNAIZ, M. (2010): "Alimentación y cultura en España: una aproximación desde la antropología social". *Physis, Revista de Saúde Coletiva* 20 (2) 357-386.
- MAUSS, M. (1971): *Ensayo sobre el don, forma y función del intercambio en las sociedades arcaicas*. Madrid: Sociología y Antropología.
- PLOEG, J.D.; H. RENTING; G. BRUNORI; K. KNICKEL; J. MANNION; T. MARSDEN; K. ROEST; E. SEVILLA-GUZMÁN, and F. VENTURA (2000): "Rural development: from practices and policies towards theory", *Sociologia Ruralis*, vol. 40 (4), pp. 391-408.
- RENTING, H.; T. MARSDEN, and J. BANKS (2003): "Understanding alternative food networks: exploring the role of short food supply chains in rural development", *Environmental and Planning*, vo. 35 (3), pp. 393-411.
- ROBERTS, P. (2008): *The End of Food. The Coming Crisis in the World Food Industry*. Londres: Bloomsbury Publishing.
- RICCI, E.; R. CONCHA (2018): *Innovación Social - Consolidación Modelo Multihélice en la Región de Antofagasta*. Ediciones Universidad Católica del Norte.